



Consejo de Seguridad

Distr. general
17 de marzo de 2004
Español
Original: inglés

Carta de fecha 10 de marzo de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Me dirijo a usted en relación con mi carta de 28 de enero de 2004 (S/2004/91). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe de Guatemala, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo

Anexo

[Original: español]

**Carta de fecha 10 de marzo de 2004 dirigida al Presidente del
Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente de
Guatemala ante las Naciones Unidas**

Por el presente medio respondo a su carta de fecha 16 de enero 2004, relativa a las preguntas y observaciones formuladas sobre el informe complementario presentado por el Gobierno de Guatemala de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001). A este respecto, me complace hacer llegar al Comité que usted preside el cuarto informe sobre las medidas que ha tomado el Gobierno de Guatemala para cumplir con los compromisos contenidos en la resolución citada (véase el apéndice).

Al respecto, sírvase notar que, para cumplir con el plazo para su entrega determinado por el Comité, dicho informe no cubre los párrafos 1.5 y 1.10. Tan pronto como las autoridades competentes de Guatemala hayan acordado lo relativo a dichas disposiciones, haremos llegar las respuestas respectivas.

(Firmado) Gert **Rosenthal**
Embajador
Representante Permanente

Apéndice

Cuarto informe del Estado de Guatemala en cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

1. Medidas de aplicación

Protección efectiva del sistema financiero

- 1.1 La aplicación efectiva apartado a) del párrafo 1 de la resolución requiere que los Estados prevengan y repriman la financiación de todo acto de terrorismo. Al respecto, el Comité agradecería que se le facilitará un resumen del Proyecto de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, que según lo señalado en la página 9 del tercer informe, está próximo a ser enviado al Congreso de la República. El Comité agradecería también que se le proporcionara un breve resumen y un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la promulgación del proyecto de ley que, según ese mismo informe (págs. 5 y 6) se ocupará concretamente de la lucha contra el terrorismo.**

Respuesta del Gobierno de Guatemala

El referido Proyecto ya ha sido presentado al Congreso de la República, en donde fue conocido por el pleno de dicho Organismo el 8 de abril de 2003 y trasladado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la cual emitió dictamen favorable sobre su contenido. Actualmente, dicho Proyecto de Ley está pendiente de ser discutido en tercera lectura, y se esperaría que el mismo fuese aprobado durante el presente período legislativo.

En relación con el contenido del Proyecto de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, éste contempla los aspectos siguientes:

- a) En el capítulo I se regula el objeto de la Ley (artículo 1) declarándose el delito de financiamiento del terrorismo como un acto de lesa humanidad. Asimismo, se da una definición amplia de lo que se entiende por terrorismo, para los efectos de la Ley (artículo 2);
- b) En el capítulo II se tipifican los delitos de financiamiento del terrorismo y contrabando de dinero en efectivo, para los cuales se fijan penas acordes con la gravedad de dichos actos, tanto para personas individuales como jurídicas. Adicionalmente, se establecen agravantes especiales para los empleados y funcionarios públicos que cometan dichos delitos y se regula lo relativo al comiso de bienes;
- c) En el capítulo III se dispone que el procedimiento y providencias cautelares se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001 del Congreso de la República. En ese sentido, se persigue implementar la inmediatez en el congelamiento de bienes, otorgándose facultades especiales al Ministerio Público;
- d) El capítulo IV contiene disposiciones relativas a la extradición, refugio y asilo, sujetándolo a los principios constitucionales y a los tratados internacionales que Guatemala ha suscrito y suscriba para el efecto;

e) En el capítulo V se contempla un régimen de personas obligadas congruente con lo establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento, y en su versión original, el Proyecto establece un régimen especial de personas (Inmobiliarias, Notarios, Contadores Públicos y Auditores, entre otros), que pueden ser susceptibles de ser utilizadas para el financiamiento del terrorismo, a las cuales por su naturaleza únicamente se les obliga al traslado de información por requerimiento. En este capítulo, también se amplía el ámbito de la actividad de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, indicando que ésta será el ente encargado de velar administrativamente por el cumplimiento de la ley, y para el efecto se le otorgan las mismas facultades, funciones y atribuciones que le confiere la normativa contra el lavado de dinero u otros activos;

f) El capítulo VI establece los procedimientos en materia de cooperación internacional, tanto judicial como administrativa, homologándolos a los ya establecidos en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos; y,

g) Finalmente, el capítulo VII contiene disposiciones transitorias y finales, entre las cuales se establece la creación del reglamento correspondiente, a propuesta de la Superintendencia de Bancos.

1.2 La aplicación efectiva de los apartados d) y e) del párrafo 3 requiere que los Estados se adhieran a los convenios o convenciones y protocolos pertinentes relativos al terrorismo y los apliquen plenamente. En la página 5 de su tercer informe, Guatemala afirmó haber ratificado el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y, en consecuencia, reconoce dicho instrumento como ley. A fin de aplicar efectivamente muchos de los 12 convenios y protocolos relativos al terrorismo, incluido el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 1999, además hacerse Parte en ellos, puede ser preciso que un Estado dicte una legislación nacional específica. Ello es necesario, por lo general, incluso en los ordenamientos jurídicos que otorgan a los tratados internacionales una jerarquía superior al del derecho interno, debido a que ciertos requisitos de esos convenios o convenciones y protocolos no pueden cumplirse sin la promulgación de la necesaria legislación interna. Por esa razón, el Comité agradecería que se le indicaran las medidas que Guatemala tiene previsto adoptar a tales efectos.

Respuesta del Gobierno de Guatemala

Sobre la implementación del Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, el Proyecto de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, ya descrito, tiene como objetivo la implementación de lo establecido en el Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, de acuerdo con el régimen jurídico interno, principalmente en lo referente a:

- a) Tipificación del delito de Financiamiento del Terrorismo (artículos 2 y 4 del Convenio, considerados en el artículo 4 del Proyecto);
- b) Responsabilidad de personas jurídicas (artículo 5 del Convenio, considerado en el artículo 7 del Proyecto);
- c) Exclusión de justificaciones circunstanciales (artículo 6 del Convenio, considerado en el artículo 6 del Proyecto);

d) Medidas para la incautación y decomiso de bienes (artículo 8 del Convenio, considerado en los artículos 9, 10 y 12 del Proyecto, y artículos 11 y 12 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República);

e) Extradición (artículos 9 al 11 del Convenio, considerados en los artículos 13 y 14 del Proyecto; y artículo 27 de la Constitución Política de la República);

f) Asistencia Jurídica Mutua (artículos 12 al 15 del Convenio, considerados en el artículo 21 del Proyecto);

g) Traslado de personas (artículo 16 del Convenio, considerado en el artículo 22 del Proyecto);

h) Medidas de prevención en el sistema financiero (artículo 18 del Convenio, considerado en los artículos 15, 16 y 17 del Proyecto, y artículos 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República);

i) Medidas sobre el transporte transfronterizo físico de dinero en efectivo (artículo 18, numeral 2, literal b) del Convenio, considerado en el artículo 25 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y artículo 8 del Proyecto);

j) Intercambio de información (artículo 18, numeral 3 del Convenio, considerado en los artículos 21 y 23 del Proyecto).

Es importante indicar que el referido Proyecto de Ley, persigue también la implementación de las disposiciones de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y las 8 Recomendaciones Especiales de GAFI en Materia de Financiación del Terrorismo.

1.3 La aplicación efectiva del apartado a) del párrafo 1 de la resolución requiere, entre otras cosas, que los Estados obliguen a bancos, instituciones financieras y otros intermediarios financieros a denunciar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes. En la página 4 de su tercer informe, Guatemala declaró que en los artículos 18 y 26 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) se regulaba las obligaciones de bancos e instituciones financieras de reportar transacciones inusuales y sospechosas a la Superintendencia de Bancos. El Comité agradecería que se le informara de las medidas que Guatemala se propone adoptar para imponer a otros intermediarios financieros la obligación de denunciar las transacciones sospechosas.

Respuesta del Gobierno de Guatemala

Los artículos 18 y 26 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, regulan la obligación de los Bancos e Instituciones Financieras de reportar transacciones sospechosas. Sin embargo, el conjunto de personas obligadas no se restringe a los sectores antes mencionados, de acuerdo con lo que establece el artículo 18 antes citado, el cual indica:

“Artículo 18. De las personas obligadas. Para los efectos de la presente ley se consideran personas obligadas, las siguientes:

1) Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

- 2) Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores.
- 3) Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito.
- 4) Las entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que realizan sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país.
- 5) Las personas individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las siguientes actividades:
 - a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques.
 - b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales.
 - c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales.
 - d) Factorajes.
 - e) Arrendamiento financiero.
 - f) Compraventa de divisas.
 - g) Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el lavado de dinero u otros activos, como se establezca en el reglamento.”

Es importante observar que el artículo 18 antes citado, en su numeral 5, inciso g), permite incluir como sujetos obligados a las personas individuales o jurídicas que realicen cualquier actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el lavado de dinero u otros activos, lo cual es factible mediante la emisión de un Acuerdo Gubernativo del Señor Presidente de la República. Este es un mecanismo que fue aplicado para incorporar como nuevas personas obligadas a las Cooperativas que realizan operaciones de ahorro y crédito, lo cual fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 438-2002 del 11 de noviembre de 2002.

Es importante indicar, que en el artículo 15 del Proyecto de Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, se establece el mismo esquema de personas obligadas contenido en el artículo 18 antes citado. El artículo 15 del Proyecto indica:

“Artículo 15. Régimen de personas obligadas. Para los efectos de la presente ley, se considerarán personas obligadas las establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en su Reglamento, y otras disposiciones relativas a dicha materia. Para el efecto, les será aplicable el mismo régimen, deberes, obligaciones, políticas para conocimiento de sus clientes y prohibiciones que establezca dicha normativa.

Las personas obligadas a que se refiere la presente ley, que ya se encuentren registradas como tales, que hayan nombrado oficiales de cumplimiento y cuenten con registros de clientes, y empleados, de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, únicamente deberán hacer extensivas a la prevención del financiamiento del terrorismo las demás medidas de control, prevención y otros deberes establecidos en dicha normativa.

Los oficiales de cumplimiento designados por las personas obligadas de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos deberán extender sus funciones y atribuciones al cumplimiento de la normativa contra el financiamiento del terrorismo.

El destino de las multas que se impongan por la aplicación de la presente ley u otras disposiciones aplicables se registrará por lo dispuesto en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos.”

Asimismo, el artículo 16 del Proyecto de Ley, regula lo referente a los reportes de transacciones sospechosas en materia de financiamiento del terrorismo. Dicho artículo establece:

“Artículo 16. Reporte de transacciones sospechosas (RTS). Las personas obligadas deberán reportar con prontitud y debida diligencia a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, toda transacción que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar el terrorismo.

Para el efecto, las personas obligadas deberán aplicar los procedimientos establecidos al respecto en el Reglamento de esta Ley, y en su defecto, en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en lo relativo al registro de transacciones inusuales que no sean comunicadas a la autoridad competente.”

- 1.4 La aplicación efectiva del apartado a) del párrafo 1 de la resolución requiere que los Estados identifiquen las transacciones inusuales y sospechosas y den cuenta de ellas a las autoridades competentes. En la página 4 del tercer informe de Guatemala se indica que la Intendencia de Verificación Especial (Unidad de Análisis Financiero) implementó formularios para la identificación de personas individuales y jurídicas, el registro de transacciones que superasen los 10.000 dólares de los EE.UU y el reporte de transacciones inusuales y sospechosas. El Comité agradecería recibir información sobre si la Intendencia de Verificación Especial (Unidad de Análisis Financiero) o alguna otra autoridad competente están facultadas para imponer sanciones o penas en caso de incumplimiento de la obligación de denunciar las transacciones.**

Respuesta del Gobierno de Guatemala

La Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial (Unidad de Análisis Financiero) en cumplimiento de lo establecido en los artículos 21, 24 y 26 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, implementó formularios que deben ser aplicados por las personas obligadas. En el caso de incumplimiento de las obligaciones que establece la normativa, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, posee facultades sancionatorias para imponer multas en el ámbito administrativo, las cuales oscilan entre 10.000 y 50.000 dólares de los EE.UU, atendiendo a la gravedad del hecho.

El artículo 31 de dicha Ley literalmente establece:

“Artículo 31. Procedimiento y sanciones. Las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de la presente ley serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones que ésta les impone y serán sancionadas por la autoridad administrativa competente con multa de diez mil dólares (10.000 dólares) a cincuenta mil dólares (50.000 dólares) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad del hecho; además de tener que cumplir con la obligación omitida que hubiere dado lugar a la sanción en el plazo fijado por la autoridad competente, y sin perjuicio de las responsabilidades penales en que hubiere incurrido.”

Complementariamente, los artículos 32 y 33 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Acuerdo Gubernativo Número 118-2002 del Presidente de la República, establecen:

“Artículo 32. Imposición de sanciones. Las infracciones que cometan las personas obligadas a cualquiera de las disposiciones de la Ley, serán sancionadas por la Superintendencia de Bancos. Para este efecto, la Superintendencia de Bancos, definirá los parámetros que deberán tomarse en cuenta para determinar la gravedad del hecho e imponer la sanción respectiva.”

“Artículo 33. Procedimiento sancionatorio. Cuando la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, detecte una infracción, dará audiencia a la persona obligada respectiva por un plazo de diez (10) días, para que exponga sus argumentos y presente las pruebas de descargo que estime convenientes.

Agotado el plazo y evacuada o no la audiencia, dictará la resolución que en derecho corresponda, la que deberá ser notificada. Las sanciones que se impongan a las personas obligadas no las exime de cumplir con la obligación omitida que hubiere dado lugar a la sanción, en el plazo que para el efecto se fije en la resolución respectiva.”

Estas mismas facultades se le confieren a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, en materia de financiamiento del terrorismo, conforme lo establecen los artículos 19 y 20 del mencionado Proyecto de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.

- 1.5 El apartado c) del párrafo 1 de la resolución requiere que los Estados congelen sin dilación los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión. En el segundo informe de Guatemala (pág. 4), se indica que la inmovilización de los fondos se decreta judicialmente a petición del Fiscal. No obstante cuando exista periculum in mora (peligro de demora), el Fiscal General podrá ordenar que se congelen los fondos, si bien, un juez o tribunal deberán confirmar dicha orden de manera inmediata. El Comité agradecería recibir información sobre si las autoridades guatemaltecas pueden congelar activos de personas y entidades involucradas en actos de terrorismo a petición de otros Estados.**

Eficacia de la maquinaria de lucha contra el terrorismo

1.6 La aplicación efectiva de los apartados d) y e) del párrafo 3 requiere que los Estados se adhieran a los convenios o convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo. Guatemala indicó en la página 7 de su tercer informe que había ratificado diez de dichos convenios o convenciones y protocolos, y que su aplicación se estaba considerando en el proyecto de ley contra el terrorismo y el proyecto de ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. El Comité agradecería que se le remitiera un breve resumen de las disposiciones pertinentes de los dos proyectos de ley y un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a su promulgación.

Respuesta del Gobierno de Guatemala

A continuación se presenta un resumen del proyecto de Ley contra el Terrorismo. Debido al reciente cambio de administración, y a la reorganización de las entidades encargadas de seguridad, el proyecto aún se encuentra en trámite dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y no ha sido presentado al Organismo Legislativo.

El Anteproyecto de Ley tiene como finalidad sancionar con drasticidad todos los actos de terrorismo pues son considerados como de lesa humanidad y de gran impacto social, constituyen una amenaza a la seguridad nacional e internacional, desestabiliza a los gobiernos legalmente constituidos, socava la sociedad y tiene consecuencias adversas al desarrollo social y económico de los Estados democráticos.

El Anteproyecto de Ley contra el Terrorismo está compuesto de un cuerpo normativo que permite prevenir los actos terroristas, mantener estrechos controles de seguridad mediante la creación del Consejo Nacional de Seguridad Contra el Terrorismo, cuya integración y funciones se encuentran orientadas para la prevención y control del terrorismo, bajo el apoyo de su Secretaría Ejecutiva, que también se crea, así con la cooperación de organismos y dependencias del Estado.

La estructura del proyecto de Ley se describe a continuación:

Título I

Régimen jurídico de la ley

Disposiciones generales

Título II

Objeto y definiciones

- a) Terrorismo
- b) Financiación del terrorismo
- c) Actividades terroristas
- d) Apoyo
- e) Actos terroristas
- f) Terrorista
- g) Agrupación terrorista
- h) Informante

Título III

De los delitos y las penas

De los delitos de terrorismo que alteran el orden constitucional y público

- Alteración del orden constitucional y público.
- De las agrupaciones terroristas.
- Uso ilegal de información.
- Falsa alarma.

Delitos contra la seguridad terrestre, marítima y aérea

- Actos contra personas, transporte e instalaciones.
- Uso de zonas prohibidas o restringidas.
- Construcción, ocultamiento y facilitación ilegal de pistas de aterrizaje.
- Construcción, ocultamiento y facilitación ilegal de sitios de ataque.

Financiación del terrorismo

- Financiación del terrorismo.
- Caso especial de financiación del terrorismo.
- Instituciones financieras.
- Rastreo financiero en materia de terrorismo.

Migración y aduanas

- Del ingreso ilegal.
- De la contratación.
- De la falsedad.
- Caso especial de defraudación aduanera.
- Caso especial de contrabando aduanero.

De la utilización de armas, municiones y explosivos

- De las armas municiones y explosivos.
- Control de agentes químicos y biológicos.
- Control de agentes nucleares y radiológicos.

Circunstancias agravantes

- a) Agravantes.

Título IV

Disposiciones especiales y su aplicación

Del consejo nacional de seguridad contra el terrorismo

- Creación.
- Integración.
- Funciones.
- Comités de manejo de crisis.

De la secretaría ejecutiva del consejo nacional de seguridad contra el terrorismo

- Creación.
- Requisitos.
- Reglamento.
- Presupuesto.

De la cooperación interinstitucional

- Cooperación.

Procedimiento

- Asistencia legal internacional.
- Asistencia informal.
- Criterio de oportunidad.
- Del comiso.
- Del procedimiento penal.

Regímenes para la aplicación de las figuras habilitadas

- Del informante.
- Arrepentido.
- Alcance de la investigación.

Cooperación entre estados

- Asistencia judicial recíproca.
- Alerta temprana.
- Intercambio de información.
- Competencia de los jueces.
- Entrega vigilada.
- Extradición.
- Refugio.
- Cumplimiento de las penas.
- Asilo.

Providencias cautelares

- Prohibición para aplicación de medida sustitutiva.

Disposiciones derogatorias y finales

- 1.7** En la página 33 de su tercer informe, Guatemala indicó que estaba previsto que el Convenio para la represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental se enviasen al Congreso de la República para su aprobación. El Comité agradecería se le informara sobre la marcha de los trabajos relativos a la ratificación de estos instrumentos internacionales y a la promulgación de las leyes y demás arreglos necesarios para que produzcan efectos conforme a la legislación interna guatemalteca.

Respuesta del Gobierno de Guatemala

Sobre el proceso de ratificación del Convenio y el Protocolo, se elaboró la providencia respectiva para ser enviada a la Secretaría General de la Presidencia para que ésta a su vez lo curse al Congreso de la República para su aprobación.

Eficacia de los controles aduaneros, fronterizos y de inmigración

1.8 La aplicación efectiva del apartado g) del párrafo 2 de la resolución requiere que los Estados impidan la circulación de terroristas mediante controles eficaces de fronteras. En la página 12 de su primer informe, Guatemala indicó que algunas zonas de sus fronteras no contaban con suficiente vigilancia, lo que hacía posible movimientos transfronterizos ilegales de personas. El Comité agradecería que se presentara un esbozo de las medidas que Guatemala prevé tomar a fin de asegurar que los terroristas no circulen a través de sus fronteras.

Respuesta del Gobierno de Guatemala

A fin de contar con medidas concretas para coordinar la cooperación binacional en materia de vigilancia y control, los Gobiernos de Guatemala y México firmaron un Memorándum de Entendimiento para crear el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) a fin de resguardar la frontera común. El GANSEF quedó instalado el 11 de octubre de 2002. Dicho Grupo incluye en su plan de trabajo acciones relacionadas con temas de migración, derechos humanos y asuntos fronterizos, terrorismo internacional, crimen organizado y cooperación jurídica, y seguridad pública.

A continuación se hace un resumen sobre la estructura y funcionamiento del GANSEF:

Estructura

El Coordinador General del GANSEF: está a cargo por parte de Guatemala, el Ministerio de Gobernación y por parte de México el Secretario de Gobernación.

Objetivos

- Combatir en las fronteras comunes en aire, mar y tierra de ambos países el tráfico de armas y municiones, narcotráfico y delitos conexos, tráfico de personas, de bienes y servicios transportados de forma ilícita, así como de las especies de flora y fauna, del patrimonio cultural, la modalidad del terrorismo internacional y otros elementos peligrosos que pudieran generar un estado de violencia.
- Transformar la zona fronteriza en un área segura y de oportunidades de desarrollo, mediante la cooperación para la protección de las personas y su patrimonio, de los derechos humanos y el medio ambiente.
- Intercambio de información permanente sobre avances y experiencias en materia de seguridad a fin que la zona fronteriza sea un área segura y de oportunidades de desarrollo.
- Coordinar el desarrollo de medidas para mejorar la seguridad en los procesos de emisión y calidad de los documentos de identidad y de viaje, para evitar la falsificación, alteración o uso indebido de los mismos.

- Optimizar el control aduanero en los puertos de salida legalmente constituidos entre ambos países, tanto si fueren terrestres, marítimos o de salida aérea, para garantizar que el trasiego internacional de armamento, municiones, explosivos y materiales sensibles, tengan la documentación de origen y destino final.

Agenda de Trabajo

1. Políticas de Migración y Derechos Humanos
 - 1.1 Migración
 - 1.2 Derechos Humanos
 - 1.3 Trabajadores Agrícolas
2. Terrorismo Internacional
3. Crimen Organizado
 - 3.1 Narcoactividad
 - 3.2 Trásiego de Armas
 - 3.3 Trásiego de Especies y Patrimonio Cultural
 - 3.4 Trásiego de Vehículos
 - 3.5 Secuestro Fronterizo
4. Seguridad Pública
5. Aduanas
 - 5.1 Asuntos Comerciales
 - 5.2 Corrupción

Se ha instruido al Subgrupo II del GANSEF, responsable de los temas de terrorismo internacional, elaborar un proyecto bilateral sobre el “Protocolo general de operaciones coordinadas de seguridad en los puntos fronterizos de cruce formales e informales” para someterlo a la consideración del plenario del Grupo de Alto Nivel tan pronto como esté concluido.

Además de lo actuado por el GANSEF, en otro foro, la VIII Reunión de la Comisión Binacional Guatemala-México, las delegaciones de Guatemala y México manifestaron su beneplácito por la inclusión de los temas de seguridad en la agenda de discusión de la Comisión Binacional, en aras de ampliar los espacios de cooperación para enfrentar fenómenos fronterizos tales como el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada (incluyendo la modalidad del pandillerismo juvenil o “maras”), que exigen soluciones compartidas y de naturaleza integral.

Acordaron formular un programa bilateral de prevención del terrorismo que contemple el intercambio eficiente de información y disposiciones de alerta temprana, que garanticen la respuesta oportuna por parte de autoridades de ambos países en caso de incidentes de esta naturaleza.

Reiteraron el interés de fortalecer la colaboración conjunta con objeto de combatir eficientemente el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de personas. Asimismo, refrendaron el compromiso de establecer mecanismos de intercambio de información entre autoridades de ambos países y realizar acciones coordinadas en contra de estos delitos.

Expresaron preocupación por la persistencia de la violencia y tráfico de estupefacientes en la frontera común y manifestaron su firme decisión de combatir la

delincuencia en la zona. Para el logro de este fin, revisarán sus bases de cooperación para actuar de manera conjunta y adoptar las medidas que la situación amerita.

1.9 En el contexto del apartado g) del párrafo 2 de la resolución, el Comité agradecería recibir un bosquejo de las disposiciones jurídicas que regulan el otorgamiento de la ciudadanía guatemalteca.

Respuesta del Gobierno de Guatemala

En Guatemala son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad.

Respecto al otorgamiento de la nacionalidad, el procedimiento para la obtención de la nacionalidad guatemalteca por naturalización se encuentra claramente especificado en la Ley de Nacionalidad, Decreto 1613 del Congreso de la República.

La Ley de Nacionalidad contempla trámites diferentes para la obtención de la nacionalidad guatemalteca para personas de origen centroamericano y beliceño, y para los nacionales de cualquier otro país del mundo. En ambos casos, los trámites son personales.

Procedimiento para la obtención de Nacionalidad Guatemalteca para nacionales de los países centroamericanos y Belice

La nacionalidad guatemalteca se solicita por medio de un memorial dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores. Luego de recibido el memorial, se examina la documentación y se notifica al interesado que deberá ratificar su solicitud y cumplir con los requisitos que se le indiquen si el expediente no está completo. Posteriormente se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

Con la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones de la Cancillería y el Dictamen de la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores procede a resolver la solicitud y a notificar al interesado.

Requisitos indispensables para dar trámite a la solicitud

1. El Memorial de contener los nombres y apellidos completos del interesado, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, y lugar para recibir notificaciones.
2. El petionario debe ser mayor de edad y el trámite es personal. No se admite representación y sólo pueden efectuar la solicitud personas civilmente capaces.
3. Los nacionales de cualquier país de Centroamérica deben fundamentar la solicitud de Declaratoria de Nacionalidad Guatemalteca en el **artículo 145** de la Constitución Política de la República.
4. Los nacionales de Belice deben fundamentar la solicitud de Declaratoria de Nacionalidad Guatemalteca en el **artículo 19 Transitorio** de la Constitución Política de la República.

Al memorial deben acompañarse los siguientes documentos:

1. Certificación de Extranjero Residente, extendido por la Dirección General de Migración, con anotación expresa en la que conste que dicha inscripción está vigente, o constancia expedida por la misma Dependencia sobre dicho extremo.

2. Certificación de Extranjero Domiciliado, extendida por el Registro Civil respectivo.
3. Carta de Nacionalidad, extendida por la Embajada o Consulado de su país de origen.
4. Pasaporte extranjero vigente.
5. Constancia de Carencia de antecedentes penales extendida por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
6. Constancia de Carencia de antecedentes policíacos extendida por la Dirección General de la Policía Nacional de Guatemala.
7. Certificado de carencia de antecedentes policíacos expedido por las autoridades del país en donde el interesado haya residido durante los últimos cinco años, debidamente legalizado.
8. Comprobar que cuenta con medios fehacientes para su subsistencia.
9. Salvo casos de exoneración basada en la reciprocidad internacional, comprobante de pago de la Cuota Anual de Extranjería (Dirección General de Migración).

Procedimiento para la obtención de Nacionalidad Guatemalteca por Naturalización

Las personas que no sean nacionales por nacimiento o de origen de los otros países que formaron la Federación de Centro América (El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), de Belice o las personas que estén amparadas por tratados internacionales de que Guatemala sea parte, deben diligenciar su solicitud de nacionalidad guatemalteca por naturalización.

La nacionalidad guatemalteca por naturalización se solicita ante las Gobernaciones Departamentales, dependencias que deberán diligenciarla hasta que se encuentre en situación de resolver. La Gobernación Departamental que conozca de la solicitud, una vez se encuentre completo el expediente, lo traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si hay requisitos que no se han cumplido en el expediente deberá volver a la Gobernación Departamental de que se trate para que se cumpla con ellos. Cuando el expediente esté completo, se otorga audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

Con la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el expediente se eleva a la Secretaría General de la Presidencia de la República, para que se someta a consideración del señor Presidente, quien decide si se emite o no el Acuerdo en el que se disponga conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización al peticionario. Una vez emitido el Acuerdo respectivo, éste es publicado en el Diario Oficial.

El Acuerdo Gubernativo en sí no acredita la nacionalidad guatemalteca por naturalización, porque ésta será otorgada en una ceremonia especial en la que previamente se toma el juramento de renuncia a nacionalidad extranjera, acatamiento y fidelidad a Guatemala, ceremonia que se realiza por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otorgada la nacionalidad, se entregan a los nuevos guatemaltecos los documentos que los acreditan como tales y los oficios correspondientes para que los excluyan en los Registros respectivos como extranjeros domiciliados y se les inscriba como guatemaltecos naturalizados.

Requisitos indispensables para dar trámite a la solicitud

1. El peticionario deberá estar inscrito como extranjero domiciliado. Esta calidad presupone que el peticionario debe ser titular de una visa de residente permanente, extendida por la Dirección General de Migración.
2. El solicitante debe de tener la calidad de Extranjero Domiciliado por lo menos durante los cinco años previos a la presentación de la solicitud, y no haberse ausentado de territorio nacional dentro de ese lapso por más de seis meses consecutivos o períodos que sumados den un año o más.
3. El interesado debe ser mayor de edad y el trámite es personal. No se admite representación y sólo pueden efectuar la solicitud personas civilmente capaces.

Requisitos del memorial de solicitud

1. El Memorial debe dirigirse al Gobernador Departamental del lugar en que tenga domicilio el solicitante.
2. Deben consignarse los nombres y apellidos completos, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, y lugar para recibir notificaciones.
3. Debe citarse el fundamento legal en que basa su solicitud, principalmente, el artículo 146 de la Constitución Política de la República y el inciso que corresponda del artículo 33 de la Ley de Nacionalidad.

Al memorial deben acompañarse los siguientes documentos:

1. Certificación de Extranjero Residente, extendido por la Dirección General de Migración, con anotación expresa en la que conste que dicha inscripción está vigente, o constancia expedida por la misma Dependencia sobre dicho extremo.
2. Certificación de Extranjero Domiciliado, extendida por el Registro Civil respectivo.
3. Carta de Nacionalidad, extendida por la Embajada o Consulado de su país de origen.
4. Pasaporte extranjero vigente.
5. Constancia de Carencia de antecedentes penales extendida por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
6. Constancia de Carencia de antecedentes policíacos extendida por la Dirección General de la Policía Nacional de Guatemala.
7. Certificado de carencia de antecedentes policíacos expedido por las autoridades del país en donde el interesado haya residido durante los últimos cinco años, debidamente legalizado.
8. Certificación de Movimiento Migratorio extendida por la Dirección General de Migración, para comprobar que el solicitante no se ha ausentado del país por más tiempo que el señalado en el artículo 33 de la Ley de Nacionalidad.
9. Constancia que acredite tener profesión, arte y oficio que le permita una manera decorosa de vivir.
10. Proponer tres testigos para que declaren a su favor, sobre los extremos que indica la Ley de Nacionalidad

11. Salvo casos de exoneración basada en la reciprocidad internacional, comprobante de pago de la Cuota Anual de Extranjería (Dirección General de Migración).

Otras diligencias que debe efectuar la Gobernación Departamental

1. Someter al peticionario a un examen de idioma español y de instrucción cívica. El examen de idioma será de carácter práctico, a fin de establecer si la persona entiende, habla y escribe el español; y el de instrucción cívica versará sobre geografía e historia elementales de Centro América y conocimiento general de la Constitución Política de la República de Guatemala.

2. Solicitar a la Dirección General de la Policía Nacional Civil que informe, previa investigación sobre, si el interesado ha observado buena conducta y tiene profesión, arte, oficio que le permita una manera decorosa de vivir.

Ordenar la publicación de la solicitud tres veces durante el término de treinta (30) días en el diario oficial y en otro de amplia circulación.

Controles para prevenir el abastecimiento de armas a los terroristas

1.10 La aplicación efectiva del apartado a) del párrafo 2 de la resolución requiere que los Estados, entre otras cosas, pongan fin al abastecimiento de armas a los terroristas. En la página 6 de su tercer informe, Guatemala indicó que el proyecto de reformas al Decreto Ley 39-89 que regulaba el control de armas aún se encontraba en trámite en el Órgano Legislativo y que se estaba tratando de mejorar las disposiciones relativas a dichos controles. El Comité agradecería recibir un resumen del proyecto de reformas al Decreto Ley 39-89 y un informe sobre la marcha de los trabajos para su promulgación.

1.11 El Comité tiene conciencia de que Guatemala puede haber respondido a todos o algunos de los puntos indicados en los párrafos anteriores en informes o cuestionarios remitidos a otras organizaciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas internacionales. En tal caso, al Comité le bastaría con recibir copias de tales informes o cuestionarios como parte de la respuesta de Guatemala a estas cuestiones, así como detalles de las medidas adoptadas para aplicar las mejores prácticas y los códigos y normas internacionales pertinentes para la aplicación de la resolución.

2. Asistencia y directrices

2.1 El Comité desea destacar una vez más la importancia que otorga a la asistencia y el asesoramiento para la aplicación de la resolución.

2.2 El Directorio de Asistencia del Comité (www.un.org/sc/ctc) se actualiza a menudo con toda la información pertinente sobre la asistencia disponible. El Comité insta una vez más a Guatemala a manifestar si existen esferas en las que la asistencia o el asesoramiento para la aplicación de la resolución podrían serle de utilidad o ámbitos en los que Guatemala podría ofrecer asistencia o asesoramiento a otros Estados sobre la aplicación de la resolución.

2.3 El Comité reitera su deseo de llevar adelante e impulsar el diálogo constructivo que ya viene manteniendo con el Gobierno de Guatemala. Según

se indica en el párrafo 3.1 *infra*, el Gobierno de Guatemala podrá ponerse en contacto con los expertos del Comité si considera que puede resultarle útil debatir con ellos los aspectos de la aplicación de la resolución.

2.4 El Comité observa que el Gobierno de Guatemala ha pedido asistencia en relación con la aplicación de la resolución en los siguientes ámbitos:

- Legislación de lucha contra el terrorismo;
- Derecho y práctica financieros;
- Derecho y práctica aduaneros;
- Derecho y práctica de inmigración;
- Derecho y práctica de extradición;
- Tareas policiales y de mantenimiento del orden público; y
- Tráfico ilegal de armas

2.5 En cuanto a la petición de asistencia dirigida por Guatemala al Comité, el equipo de asistencia técnica del Comité observa que Guatemala ha recibido ayuda para la elaboración de normas y que sus otras solicitudes se han comunicado a otras posibles fuentes de asistencia. El Comité también observa que su equipo de asistencia técnica se ha reunido con un representante del Gobierno de Guatemala para mantener conversaciones sobre esas posibles fuentes de asistencia y asesoramiento.

2.6 En cuanto a las necesidades de asistencia de Guatemala en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, el Comité señala que el Gobierno de Guatemala puede solicitar asistencia técnica directamente del programa conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI)/Banco Mundial en la materia. Concretamente, dicha asistencia puede comprender la redacción de normas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluidos aquellos casos en que el Gobierno de Guatemala ya cuenta con proyectos de ley y desea que se les someta a examen para verificar su conformidad con la resolución 1373 y las disposiciones del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

El Gobierno de Guatemala puede beneficiarse de este programa comunicándolo directamente con el FMI, para solicitar asistencia técnica preferiblemente por correo electrónico o fax dirigido a:

The International Monetary Fund (Fondo Monetario Internacional)
700 19 th Street, N.W:
Washington, D.C. 20431

Con respecto a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y en concreto el aumento de los controles sobre el sector financiero, podrá dirigirse a:

Sr. R. Barry Johnston
Assistant Director
Monetary and Exchange Affairs Department
Correo electrónico: *bjohnston@imf.org*
Fax: 202-623-7830

En cuanto a las cuestiones legislativas y jurídicas, incluido el funcionamiento de una dependencia de inteligencia financiera, sírvase dirigirse a:

Sr. Jean – Francois Thony
Assistant General Counsel
Legal Department
Correo electrónico: *jthony@inf.org*
Fax: 202-623-4292

- 2.7 En esta etapa de su labor, el Comité se centrará en peticiones de asistencia relativas a cuestiones de las fases “A” y “B”. Sin embargo, la asistencia que un Estado puede prestar a otros sobre cualquier aspecto de la aplicación de la resolución dependerá de los acuerdos concretados entre ellos. El Comité agradecería que se le mantuviera informado de tales acuerdos y sus resultados.**
-